

Oscar  
Campanini

Marco  
Gandarillas

Eduardo  
Gudynas



# **DERECHOS Y VIOLENCIAS EN LOS EXTRACTIVISMOS**



**EXTRAHECCIONES EN BOLIVIA Y LATINOAMÉRICA**

## Oscar Campanini

(BOLIVIA)

Sociólogo, especialista en investigación sobre agua y saneamiento, minería, extractivismo y derechos humanos y ambientales. Actualmente es Director del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB.



## Marco Gandarillas

(BOLIVIA)

Sociólogo, Universidad Mayor de San Simón. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Centro de Estudios Superiores Universitarios – CESU. Actualmente es doctorante en CIDES Post grado en ciencias del desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, centro del que es investigador asociado.

Se ha dedicado a la investigación en el campo de los extractivismos bolivianos y otros países de la región. Entre 2007 y 2017, fue Director Ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB.



## Eduardo Gudynas

(URUGUAY)

Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Desde hace más de una década analiza los efectos de los extractivismos y acompaña a distintas organizaciones ciudadanas. Fue el primer latinoamericano en recibir la cátedra Arne Naess en ambiente y justicia social de la Universidad de Oslo, y acaba de ser incluido entre los 74 pensadores clave en desarrollo. Sus últimos en Bolivia abordan uno la teoría de los extractivismos, y otro la corrupción en los extractivismos; ambos editados por La Libre.



Oscar  
Campanini

Marco  
Gandarillas

Eduardo  
Gudynas

# DERECHOS Y VIOLENCIAS EN LOS EXTRACTIVISMOS

EXTRAHECCIONES EN BOLIVIA Y LATINOAMÉRICA



## **Derechos y violencias en los extractivismos Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica**

© Oscar Campanini  
© Marco Gandarillas  
© Eduardo Gudynas

Editores:  
LALIBRE Proyecto Editorial  
Humboldt 1135, casi esq. Calancha  
Tel. 591(4) 450 4199  
Contacto: [lalibre.libreriasocial@gmail.com](mailto:lalibre.libreriasocial@gmail.com)  
Cochabamba, Bolivia

Primera edición: Diciembre 2019

Depósito legal N° 2-1-669-20  
ISBN: 978-99974-321-7-9

Descargo de responsabilidad:  
Los contenidos del texto son de responsabilidad del autor  
y no representan necesariamente a las instituciones editoras  
o que apoyaron el estudio.



Esta publicación es posible  
gracias al apoyo de:



## CONTENIDO

Prólogo por Rocío Silva Santisteban .....	Pág. 7
Introducción .....	Pág. 11
1. Extractivismos y derechos: Conceptos y puntos de partida .....	Pág. 15
2. Derechos en Bolivia .....	Pág. 39
3. Extractivismos, derechos y violaciones en Bolivia .....	Pág. 53
4. Incumplimientos, violencia y extrahecciones .....	Pág. 111
5. Espacios, territorios y desarrollo .....	Pág. 145
6. Conflictos, resistencias y defensa de los derechos .....	Pág. 167
7. Democracia y política .....	Pág. 189
8. Tendencias al futuro y alternativas de cambio .....	Pág. 213
Bibliografía .....	Pág. 233

# **DERECHOS y VIOLENCIAS en los EXTRACTIVISMOS**

**Disponible en papel o digital**

**Compras y consultas:**

**Editorial La Libre**

**[www.lalibreriasocial.com](http://www.lalibreriasocial.com)**

**Av. Humboldt 1135, Cochabamba, Bolivia**

**Teléfono: 591 4 4504199**

**WhatsApp: 591 72253834**

**Correo-e: [info@lalibrelibreriasocial.com](mailto:info@lalibrelibreriasocial.com)**



## INTRODUCCIÓN

**V**iolencia es lo que se opone al orden de la Naturaleza. Ese fue uno de los significados del concepto durante varios siglos, hundiendo sus raíces en la antigüedad clásica occidental. El violento era quien se oponía con fuerza al dinamismo o al estado natural no solamente en un sentido físico, sino también en actos que estaban fuera de la razón o de la justicia. La violencia, entendida de este modo, también es moralmente injusta<sup>1</sup>.

Este libro está enmarcado tanto en esos clásicos entendidos de la violencia como en los actuales usos del término. Se enfoca en los problemas actuales de los extractivismos, tales como las explotaciones mineras o petroleras, con todos sus severos impactos sociales y ambientales. Toda vez que eso ocurre se están violando los derechos de las personas y del ambiente. De este modo, se vinculan cuestiones de enorme urgencia en Bolivia y en toda América Latina: los extractivismos, los derechos y la violencia.

Este estudio muestra que los avances de los extractivismos discurren por una paulatina y sostenida erosión y limitación en la salvaguarda de los derechos. En muchos de esos casos ello sucede bajo dinámicas de violencia, que pueden ser la imposición de un emprendimiento como la persecución a líderes ciudadanos. Así las contradicciones entre extractivismos y derechos expresan, al mismo tiempo, problemas más profundos sobre la justicia y la democracia. Otra vez los significados de las palabras son elocuentes: violar en su sentido original implica quebrantar o traspasar una ley, precepto o estatuto.

---

1 Las referencias sobre significados y etimologías se basan en Bárcia (1883) y Magnavacca (2014).

El análisis se fundamenta y recupera información especialmente de los reportes presentados en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de los Derechos del Estado Plurinacional de Bolivia, ante Naciones Unidas en 2019. Los informes fueron presentados por un colectivo de más de cuarenta organizaciones de Bolivia, asentadas en distintas localidades y que cubren una amplia variedad de movimientos sociales. Articuladas en la Alianza por los Derechos Humanos y el Ambiente, estas organizaciones e instituciones son (ordenadas alfabéticamente): Apoyo para el Campesino e Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH-LP), Capitanía Comunal Takovo Mora (CTM), Caritas Pastoral Social Tarija, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Comunidad Caigua en el área de influencia directa del Parque Nacional Aguaragüe, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente (CODAPMA), Colectivo Árbol Santa Cruz, Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales-Colectivo Casa, Colectivo Consumidoras Conscientes, Colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba, Colectivo Salvaginas, Colectivo Wasi Pacha, Comité de Defensa Valle de Tucabaca (CDVT), Comité de Gestión Reserva de Vida Silvestre Tucabaca (CGAP/UCPNT), Consejo Continental Guaraní (CCNAGUA), Ecotambo Tejiendo Transiciones (ECOTAMBO), El Q'epi del Trueque Bolivia, Escuela de Líderes Ambientales (ELA), Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCC-J), Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, Jacha Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, LA RED (Asociación de Creadores y Autores del Audiovisual y Cine de Cochabamba), Mancomunidad de Comunidades Indígenas de Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (MANRIBEQ), Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos (BLT), Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Productividad Biósfera Medio Ambiente (PROBIOMA), Red Eclesial Panamazónica-Mojos, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP), Somos Sur, Subcentral Tariquí, Subcentral



Cabildos Indígenas Región Isiboro Sécuré TIPNIS, Reacción Climática, Taller de Iniciativas de Estudios Rurales y Agrarios TIERRA, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos (VCDDHH), Warmis en Resistencia Espacio de Mujeres, Nación Qhara Qhara, Ayllu fundo Rústico Acre Antequera, Consorcio TICCA Bolivia, Red Eclesial de la Amazonía Boliviana (REPAM Bolivia). A dichos reportes contribuyeron Gustavo Rodríguez, Natalia Alem, Franco Albarracín, Rita Saavedra, Toribia Lero y Edwin Prada.

Hemos complementado la información con el seguimiento de otros casos en Bolivia, y además se ha incluido comparaciones con las situaciones de los demás países de América Latina.

Esta amplia base de testimonios y documentos muestra que no estamos ante una problemática propia de una reflexión académica, sino que expresa dramas cotidianos, concretos y dolorosos de muchas personas en distintas localidades. La mayor parte de estos suceden en comunidades rurales, campesinas o indígenas, muchas de ellas viven en pobreza o están marginadas cultural o económicamente. Los pobladores son los que sufren la violencia en sus cuerpos, en sus familias, comunidades y en el ambiente que les rodea. Sus voces pocas veces se escuchan y solo resuenan cuando se organizan en marchas o protestas. Los casos que se comparten en este estudio imponen el mandato de buscar alternativas y soluciones tanto en el plano de los derechos como ante los extractivismos.

Es necesario advertir que los autores no son abogados, juristas o constitucionalistas, por lo que el análisis no ahonda en esas perspectivas. Pero abordamos el marco de los derechos humanos como un contexto indispensable para entender la situación social y ambiental, y por ello la revisión es multidisciplinaria. Se cubre desde los impactos en la calidad de vida y el ambiente a las implicancias que esto acarrea para la política y la democracia. Estos y otros temas parten de un acompañamiento a los movimientos sociales, convencidos de la necesidad de explorar alternativas de salida a los problemas actuales.

Esto resulta en un ejercicio que por primera vez en América Latina aborda al mismo tiempo los extractivismos y los derechos tanto en sus dimensiones sociales como ecológicas. Existen importantes antecedentes que, por ejemplo, advierten sobre los incumplimientos de derechos en ciertos extractivismos y otros que, pongamos por caso, señalan sus impactos ambientales. Pero no conocemos precedentes que consideren todas esas dimensiones simultáneamente, otorgándole

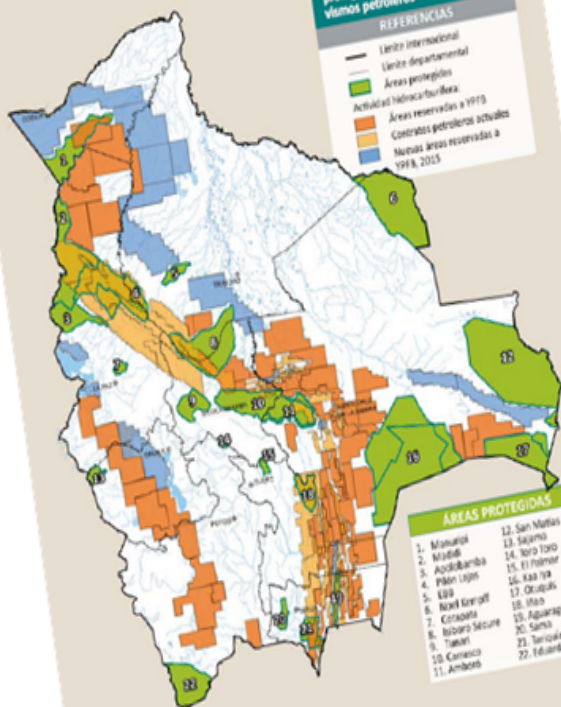
el mismo peso a los derechos de las personas como a los del ambiente. Este tipo de análisis integrado muestra otro sendero que necesariamente se debe seguir en Latinoamérica.

Esta revisión en parte se enmarca en la iniciativa del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, en la cual participa el CEDIB junto con otras organizaciones de América Latina y que coordina el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

**Figura 3.14**  
Ubicación geográfica de los principales casos revisados por áreas protegidas afectadas por extractivismos petroleros

## REFERENCIAS

- Límite internacional
- Límite departamental
- Áreas protegidas
- Actividad hidrocarburofera
- Áreas reservadas a 1979
- Contratos petroleros actuales
- Nuevas áreas reservadas a 1979, 2015



Estudios de casos para todos los tipos de extractivismos, a partir de reportes y testimonios de unas 50 organizaciones ciudadanas de Bolivia. Descripción y análisis, acompañados por mapas, fotografías y esquemas. Caracterización de los impactos sociales y ambientales. Discusión de las implicaciones para la justicia y la democracia, acompañados de ejemplos para toda América Latina.

## 4

## INCUMPLIMIENTOS, VIOLENCIA Y EXTRAHECCIONES

**L**a revisión presentada para Bolivia permite adelantar que suceden todo tipo de incumplimientos de los derechos bajo cualquier extractivismo. En este capítulo se examina con mayor detalle algunos aspectos de esta problemática, y desde ahí se da un paso hacia otra particularidad destacada que resulta del análisis: la recurrencia de la violencia.

En efecto, los incumplimientos de los derechos en los extractivismos frecuentemente están asociados a distintos tipos de violencia, y eso se expresa en vinculaciones más complejas de lo que usualmente se asume. En este capítulo se examina esas relaciones con mayor detalle, ofreciéndose más precisiones sobre la dinámica que en este libro se denomina como extrahecciones, la apropiación de recursos naturales apelando a la violencia.

### Incumplimiento de los derechos

En los casos examinados para Bolivia en el capítulo anterior, y la información complementaria, se identifican violaciones o incumplimientos de derechos en los principales tipos de extractivismos que existen en el país. En efecto, estas vulneraciones se han registrado en los extractivismos mineros, como en Huanuni y en el resto de la cuenca del lago Poopó; en los enfocados en hidrocarburos, como en el pueblo tacana; y en los agrícolas, que como consecuencia de los monocultivos de

soya se afecta los derechos a la salud, agua y alimentación. Situaciones similares se repiten con incumplimientos de derechos en la construcción de redes de conexión como ocurrió con el TIPNIS y con las obras de infraestructura como son las hidroeléctricas.

Considerando todo el conjunto de estas actividades, se encuentra que se incumplen todos los tipos de derechos que de una manera u otra están vinculados con la calidad de vida y del ambiente. Es así que se afectan los derechos a la salud, alimentación, agua, ambiente sano, información y consulta, autogobierno y gestión territorial de pueblos indígenas, y de protección a indígenas en aislamiento.

También operan incumplimientos sobre los derechos de aquellas personas o grupos que exigen ser informados, participar en la toma de decisiones, denunciar o incluso oponerse a esos emprendimientos extractivos. Estos incumplimientos se suman a los otros y, por lo tanto, resulta en una enorme lista de derechos que son incumplidos o violados.

Estos incumplimientos tienen lugar en extractivismos bajo muy distintos regímenes de propiedad, acceso o gestión, desde aquellos a cargo de empresas estatales, como también en la minería cooperativa o en emprendimientos privados.

Estas situaciones revisten distintas particularidades que deben ser analizadas, y por ello es apropiado ordenar el análisis en dos ámbitos, aunque sin duda están superpuestos entre ellos. Por un lado, se cuentan los derechos afectados por los impactos locales de los extractivismos, tales como los incumplimientos de los derechos que deberían asegurar la calidad de la salud, los alimentos o el agua. Por otro, se observan incumplimientos en los derechos de las personas que reaccionan o se oponen a los extractivismos, como cuando se les niega los derechos de autogobierno indígena o a la libre expresión de las organizaciones militantes. En la primera situación, los derechos incumplidos están directamente relacionados con los extractivismos, pero en la segunda, esos recortes operan sobre qué pueden o no hacer los ciudadanos y sus organizaciones.

Comenzando por los impactos locales de los extractivismos que están asociados a incumplimientos de los derechos, los casos examinados en el capítulo 3 muestran al menos 20 derechos comprometidos en el sector petrolero, 18 en el sector minero y 11 en la agropecuaria. No es posible describir esta situación como simple accidente o evento aislado, sino que las violaciones de los derechos están diseminadas en todos los extractivismos.



**Figura 4.1** | Machacamarca-Oruro: Cooperativas que trabajan aglomeración de relaves de la Empresa Minera Estatal Huanuni en Machacamarca (2012); las aguas servidas generadas desembocan en el río Huanuni-Machacamarca y al Lago Poopó, contaminando aguas y suelos que generan múltiples violaciones de derechos (salud, calidad del agua, ambiental, etcétera.). Foto CEDIB

La información comparada con la de otros países refleja problemáticas similares, se repite la condición de múltiples derechos incumplidos simultáneamente frente a los extractivismos. Existe un enorme volumen de evidencia disponible, y esa asociación ha sido indicada una y otra vez (por ejemplo, Raftopoulos, 2017 e Hincapié, 2019, por revisiones recientes). En efecto, un repaso a los conflictos más conocidos y relevantes de los últimos años muestra que en todos ellos se comprometían, de un modo u otro, distintos derechos.

En Perú los conflictos y resistencias ante los proyectos de Tambogrande, Conga, Tía María o Las Bambas visibilizan afectaciones de derechos que van desde la información y consulta a la vida de las personas, al deterioro de los derechos sobre la tierra, la calidad del agua y del aire, las condiciones ecológicas o la salud (Paredes, 2008; Scurrah, 2008; De Echave, 2012, 2018; De Echave y Diez, 2013). Situaciones similares con la minería

se reportan en otros países, tales como Colombia (véase los ensayos en Toro Pérez y colab., 2012; Garay Salamanca, 2014), Ecuador (Fontaine, 2006; Cisneros, 2011; Sacher y Acosta, 2012; Chicaiza, 2014; Van Teijlingen y colab., 2017) y en otros del continente (Zhouiri y colab., 2016; Zhouiri, 2017; Ruiz 2018; OCMAL, 2019).

Estas y otras evidencias muestran que en los extractivismos es frecuente que los impactos ambientales de esos emprendimientos signifiquen que se están incumpliendo derechos a la calidad del ambiente o a la salud, entre otros. Estas vulneraciones ocurren en distintos niveles: inadecuadas evaluaciones de impacto ambiental (EIA) en la etapa inicial, ausencia o inadecuados controles, alegaldades, corrupción, y malos mecanismos de sanciones por incumplimientos en la etapa de operación. Algunas afectaciones sobre la salud pública y la calidad de vida son impactantes, tales como sucede en el complejo minero y metalúrgico La Oroya en Perú (e.g. Leyva, 2012). Otros casos se destacan por incumplimientos sostenidos por largo tiempo, como ocurre con las aguas y suelos contaminados por hidrocarburos en distintas regiones de la Amazonía de Ecuador (el más conocido son los impactos producidos por la petrolera Texaco, hoy Chevron; véase Serrano, 2013) o los pasivos mineros abandonados en sitios andinos (un ejemplo para Perú en Leyva, 2012).

En los extractivismos agropecuarios es recurrente que se incumplan simultáneamente los derechos a la calidad de vida, a la salud y al ambiente, debido al deterioro ambiental, por ejemplo, por deforestación, desertificación, contaminación de suelos y aguas, que a su vez se solapa con impactos sobre la salud por el uso de agrotóxicos. Entre las evidencias más destacadas están las consecuencias de la expansión de la soya en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tales como la fumigación descontrolada, afectaciones sobre la salud pública, etcétera (Do Carmo y Franci Alvarez, 2009; Palau y colab., 2012; o Avila-Vazquez, 2014). La misma vinculación es evidente en la contaminación de la minería al afectar la salud de las personas (con situaciones muy graves como la contaminación por metales pesados; CooperAcción, 2016, o la contaminación por mercurio de mujeres y niños en Perú; Vallejo Rivera, 2014).

La información de otros países sudamericanos arroja evidencia de violaciones de los derechos a las libertades y salvaguardas políticas y sociales. A modo de ilustración, eso ocurre en Colombia (Negrete Montes, 2013; Vargas Valencia 2013), en Ecuador (CEDHU y FIDH, 2010; Morley, 2017); en Venezuela (Ruiz, 2018), entre otros. Se incumplen derechos laborales como las violaciones de las condiciones de seguridad y salud, trabajo esclavo y otras formas de violencia rural. Esto se ha reportado en Paraguay en los monocultivos de soya (Repórter Brasil y Base IS, 2010;





**Figura 4.2** Representación esquemática de algunos de los derechos comprometidos, incumplidos o violados de los ciudadanos y sus organizaciones que actúan frente a los extractivismos.

Palau y colab., 2012) y en los enclaves petroleros de Colombia (González Posso, 2011). La situación no es ajena a Bolivia, donde se han elevado varias denuncias de incumplimientos laborales y hostigamiento de empresas chinas que operan en los extractivismos sudamericanos (por ejemplo, lo ocurrido con Sinohydro<sup>1</sup>).

Los accidentes vinculados con grandes desastres, como las rupturas de las represas de relaves mineros de Mariana y Brumadinho en Brasil, expresan un encadenamiento de incumplimientos de esos derechos<sup>2</sup>. El riesgo de accidente aumenta en tanto se incumplen las obligaciones de control de la calidad ambiental, operan redes

1 Trabajadores denuncian a la empresa china Sinohydro por malos tratos, Correo del Sur, Sucre, 19 de septiembre de 2016, [https://correodelsur.com/local/20160919\\_trabajadores-denuncian-a-la-empresa-china-sinohydro-por-malos-tratos.html](https://correodelsur.com/local/20160919_trabajadores-denuncian-a-la-empresa-china-sinohydro-por-malos-tratos.html). A Sinohydro denuncian de abuso laboral, 20 de agosto de 2017, El Día, Santa Cruz, [https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=360&pla=3&id\\_articulo=233255](https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=360&pla=3&id_articulo=233255)

2 El desastre de Mariana (Minas Gerais) ocurrió el 5 de noviembre de 2015, por la ruptura de una represa en una operación de las mineras Vale y BHP Billiton. Murieron por lo menos 18 personas, se volcaron más de 60 millones m<sup>3</sup> de lodos tóxicos, y los impactos ambientales y sociales son muy severos y tendrán larga duración. El desastre de Brumadinho (Minas Gerais) ocurrió el 25 de enero de 2019 en un emprendimiento de la minera Vale. Fallecieron al menos 259 personas y se liberaron al menos 12 millones m<sup>3</sup> de lodos tóxicos, que también producen un gravísimo impacto social y ambiental. Véase la sección dedicada a este caso en la revista de la Asociación Brasileña de Antropología, Vibrant, Vol 14, No 2, 2017, coordinado por Andréa Zhouiri.



de corrupción que permiten los incumplimientos y se acallan las voces de alerta ciudadana. Si sucede un accidente, el daño se multiplica porque genera impactos que a su vez violan muchos otros derechos, desde las personas que mueren en esa tragedia a la persistencia de aguas y suelos contaminados.

Se deben destacar otras situaciones. En los impactos de los extractivismos sobre niños se violan sus derechos a la salud, protección familiar, educación, además se les impone el trabajo o incluso el trabajo esclavo (por ejemplo, en Colombia se estimó que entre 200.000 a 400.000 niños trabajaron en mineras informales o ilegales, en las que sus derechos no son atendidos; Defensoría del Pueblo Colombia, 2010).

Existe abundante evidencia del impacto diferencial de los extractivismos sobre las mujeres (véase como ejemplos los aportes de Ulloa, 2016; Silva Santisteban, 2017 y Erpel Jara, 2018). En los enclaves mineros y petroleros se instalan establecimientos de prostitución que en muchos casos están articulados con redes de tráfico de niñas y adolescentes. Repetidamente se ha denunciado esta situación en el sur de Perú, en zonas donde se practica la minería de oro<sup>3</sup>. El problema se registra en otras regiones de ese país y también ha sido reportado en Bolivia, Colombia, Venezuela, etcétera. (Miranda, 2016).

También hay una amplia evidencia de incumplimientos de los derechos que aseguran los usos tradicionales de la tierra, las prácticas culturales propias y otras salvaguardas en comunidades locales, sobre todo de los pueblos indígenas. Entre los derechos afectados se cuentan los que deben asegurar la información, consulta, participación, etc., como ha ocurrido en varios países por años, tanto en aquellos con marcos institucionales débiles como Colombia (González Posso, 2011; Negrete Montes, 2013; Vargas Valencia 2013), Ecuador (CEDHU y FIDH, 2010; Cisneros, 2011; Maldonado 2013; Morley, 2017), Perú (Scurrah, 2008; De Echave, 2012, 2018) o Brasil (Zhourri, 2014, 2017) como en naciones con instituciones más estables como Uruguay (Varela Fagúndez y Gudynas, 2016).

La misma problemática con afectaciones en todo el abanico de derechos se registra en las redes de conexión y las áreas de soporte de los extractivismos. Entre algunos casos destacados está la enorme conexión ferroviaria, de 892 kilómetros, entre el enclave minero de Carajás y el puerto de San Luis, en Brasil. Por esas vías transitan 24 trenes por día transportando aproximadamente 300.000 toneladas de mineral de

3 Después de La Pampa: los nuevos focos de la trata en Madre de Dios, E. Salazar, K. Chacón y G. Santos. Ojo Público, Lima, 8 de septiembre de 2019, <https://ojo-publico.com/1351/después-de-la-pampa-los-nuevos-focos-de-la-trata-en-madre-de-dios>

hierro, y que al cruzar 27 ciudades y más de 100 comunidades se genera un impacto sobre un estimado de 2 millones de personas (Gomes Monteiro y Chammas, 2015). En ciertas circunstancias, los emprendimientos de soporte pueden implicar violaciones de derechos todavía más extendidas que las de los propios enclaves extractivos. Es el caso de la represa de Belo Monte en Brasil, que ha sido calificada como una de las más serias violaciones de los derechos humanos en ese país (ver, por ejemplo, el reporte sobre los efectos de las comunidades desplazadas de sus hábitats originales en el Río Xingú; Barbosa Magalhães y Carneiro da Cunha, 2017; también Riethof, 2017). En particular la Amazonía está soportando una importante presión por esos emprendimientos (véase los ensayos en Franco, 2012, como ejemplo).

También se puede señalar las violaciones de derechos de la Naturaleza, siguiendo un ejercicio similar al realizado en el capítulo 3. En Ecuador, donde esos derechos están reconocidos, los incumplimientos son evidentes con la megaminería y la explotación petrolera en la Amazonía (por ejemplo, Saavedra, 2013, recuerda que en la minería no se cumple los mandatos de asegurar la sobrevida de la Naturaleza ni su restauración como indica la Constitución ecuatoriana; y la apertura de la explotación petrolera de los campos ITT en Yasuní implicó la caída de esos derechos<sup>4</sup>). En Colombia, donde recientemente se han reconocido esos derechos para algunos ríos y la ecorregión amazónica, ocurre otro tanto<sup>5</sup>. Los procesos judiciales en justicia ambiental que lograron avanzar tienen similares condiciones (como las denuncias contra la minera Pascua Lama en Chile por incumplir sus obligaciones de proteger el ambiente; Toro, 2015).

Por otro lado, los incendios en Brasil de 2019, que afectaron el bosque tropical Amazónico, las sabanas arboladas del Cerrado, áreas del nordeste y el Pantanal, también son claras violaciones de derechos de la Naturaleza. Esos hechos tienen varias similitudes con el caso boliviano, buena parte de los focos responden a la quema de pastizales y bosques talados para la agricultura o ganadería, están asociados al avance de la deforestación y están inmersos en un contexto en el que está presente el tráfico de tierras, minería, etcétera.<sup>6</sup>

4 Los derechos de la naturaleza después de la caída de la moratoria petrolera en la Amazonia, E. Gudynas, ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones), Quito, 18 de agosto de 2013, <https://www.alainet.org/es/active/66547>. Ver, además, Derechos de la naturaleza: balance de una década, E. Gudynas, Plan V, Quito, 4 de junio de 2018, <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/derechos-la-naturaleza-balance-una-decada>

5 Por ejemplo, a un año de reconocerse a la Amazonía como sujeto de derechos, se reporta: No se cumplen las órdenes para frenar la deforestación en la Amazonía, T. Pardo Ibarra, 5 de abril de 2019, El Tiempo, Bogotá, <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/no-se-han-cumplido-las-ordenes-para-frenar-la-deforestacion-en-la-amazonia-colombiana-346000>

6 A partir de los incendios de 2019, ver el informe Los incendios en la Amazonia dejan sin aliento, pero el humo huele

Si se asumiría que en los demás países sudamericanos existiera un mandato constitucional de esos derechos que fuese similar al ecuatoriano, se estaría ante múltiples violaciones (como resulta de los casos examinados anteriormente). Esto no puede sorprender, ya que en los extractivismos ni siquiera se cumple a cabalidad los derechos por un ambiente sano.

Los incumplimientos de muchos de los derechos involucran sobre todo a los pueblos indígenas (véase, por ejemplo, RRI, 2013; Delgado Galárraga, 2018; REPAM, 2018). El informe de 2011 del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, indica que los extractivismos afectan derechos sobre sus territorios, calidad de vida, libre determinación, aunque agrega, con alarma, que ponen en riesgo la existencia misma de esas naciones originarias<sup>7</sup>; reportes iguales se han dado a conocer para otros países del continente<sup>8</sup>.

La reciente evaluación de los derechos humanos de la CIDH (2019) en toda la cuenca amazónica deja en claro que existen violaciones y riesgos para todos los tipos de derechos y todos los extractivismos. Por ejemplo, en cuanto a la minería, se señala que es “una de las principales amenazas a la integridad de los bosques y a la supervivencia cultural de sus habitantes” (CIDH, 2019: 51). Estas revisiones coinciden con el análisis de la situación de Bolivia que se presentó en el capítulo 3.

Existe evidencia de repetidos y persistentes incumplimientos de los derechos a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, tal como se determinó en Bolivia (por ejemplo, en Colombia, Perú y Ecuador, según RRI, 2013). Algunos de estos casos son muy conocidos, como el de la comunidad Sarayaku en Ecuador ante los extractivismos petroleros, por lo que el 2012 la CIDH declaró la responsabilidad del Estado por violar los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural<sup>9</sup>. Se denunció la violación de 11 derechos

---

a dinero, C. Krauss, New York Times, 4 de noviembre de 2019, <https://www.nytimes.com/es/2019/11/04/espanol/america-latina/ganaderia-amazonia-incendios-forestales.html>

También Incendios en el Amazonas: lo que se sabe de cómo se originaron los fuegos que causan estragos en la región, BBC, Londres, 26 agosto 2019, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825>

7 Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos, Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, Consejo Derechos Humanos, A/HRC/18/35, 2011.

8 Por ejemplo, para Perú: La situación de los pueblos indígenas en Perú, en relación con las industrias extractivas, Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, J. Anaya, Consejo Derechos Humanos, en A/HRC/27/52/Add.3, 2014.

9 Pueblo Indígena Kichwa de Sarayacu VS Ecuador, Ficha Técnica, CIDH, en [http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha\\_tecnica.cfm?nld\\_Ficha=206&lang=es](http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=206&lang=es); además Ortiz-T., 2016

de la Convención Americana, dejando en claro que el gobierno no solo permitió, sino que alentó la actividad petrolera en los territorios de esa comunidad. Una situación similar se dio con el avance de la explotación petrolera en otras zonas amazónicas de Ecuador (Morley, 2017). En general se observa que no se practican las consultas, no hay información disponible, y la poca información que existe no siempre es la adecuada o comprensible. Además, allí donde se aplican algunas consultas, el Estado interviene para que esta no sea libre, sino que actúa según sus intereses.

Las denuncias desde los pueblos indígenas también confirman la dinámica de varios derechos que son incumplidos simultáneamente, como ya se adelantó anteriormente. Por ejemplo, los wayúu de Colombia están enfrentando desde hace años a la mina de carbón Cerrejón, debido a los impactos en el ambiente (afectación del agua y el deterioro de la salud)<sup>10</sup>. En el sur de Colombia, los indígenas que rechazan la minería de oro sostienen que se violan sus derechos a la calidad del ambiente, agua, manejo de sus territorios, autonomía, prácticas productivas propias, etcétera (como señala el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC; CINEP 2012). Las comunidades afrocolombianas también enfrentan problemas similares<sup>11</sup>. Asimismo, la expansión de la agricultura y ganadería de exportación son factores involucrados en la violación de derechos de los indígenas. Uno de los casos más conocidos en los últimos años es el de los guaraní kaiowá, en Brasil, que para algunos reviste la condición de etnocidio, tal como ha denunciado la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)<sup>12</sup>.

Entre los incumplimientos están aquellos que afectan los derechos a la gestión y organización de los territorios. Por ejemplo, hay empresas mineras que imponen la compra de predios a comunarios, o bien la creación de un mercado de tierras convencional basado en la propiedad individual; este es uno de los componentes,

10 La CIDH otorgó medidas cautelares en 2015, y que a juicio de los wayúu han sido incumplidas; ver por ejemplo La respuesta del Gobierno ante las súplicas wayúu por agua potable, El Tiempo, Bogotá, 26 de septiembre de 2019, <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/planes-para-llevar-agua-a-la-guajira-y-comunidades-wayu-416372>

11 La disputa por los recursos naturales en los territorios afrocolombianos. El caso de Buenos Aires y Suárez (Cauca) desde una perspectiva de derechos humanos, Observatorio Discriminación Racial, Universidad de los Andes, Colección Justicia Global, Documento 5, Bogotá, 2011.

12 APIB denuncia à ONU a violação de direitos e o genocídio dos indígenas brasileiros, Amazônia, 24 de noviembre de 2012, <https://amazonia.org.br/2012/11/apib-denuncia-%C3%A0-onu-a-viola%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-e-o-genoc%C3%ADdio-dos-ind%C3%ADgenas-brasileiros/>  
APIB denuncia à CIDH violações a direitos humanos dos povos indígenas no Brasil, L. Nassif, Journal GGN, 12 de noviembre de 2018, <https://jornalgggn.com.br/questao-indigena/apib-denuncia-a-cidh-violacoes-a-direitos-humanos-dos-povos-indigenas-no-brasil/>

por ejemplo, en las disputas con la minera Yanacocha en Perú (Kamphuis, 2012). También es frecuente que se incumplan los derechos a la información y consulta, en especial los salvaguardados por el Convenio 169 de la OIT; un caso es de los indígenas wayúu que no fueron debidamente consultados o informados por la desviación de un río en el enclave minero de Cerrejón en Colombia (Arias y Murcia, 2015). Hay situaciones extremas, como las invasiones de mineros informales e ilegales que ocupan un territorio indígena. Esto sucedió cuando al menos 20.000 mineros invadieron tierras yanomami en Brasil<sup>13</sup>. En este país se ha acumulado mucha evidencia de esas violaciones en el medio rural, tanto sobre campesinos como indígenas, gracias a los reportes de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Consejo Indigenista Misionario, y que en su mayoría están relacionadas con el control de territorios y tierras, y el agua (por ejemplo CIMI, 2019 y CPT, 2019).

Se reporta situaciones en las que los impactos de los extractivismos no solo deterioran el ambiente o las capacidades de los grupos locales de enfrentarlos, sino que pone en riesgo la propia viabilidad de un pueblo indígena. Por ejemplo, el pueblo urus, que habita desde tiempos prehispánicos esa zona, depende del lago Poopó como fuente de los recursos que lo sustenta. La contaminación progresiva del área y sus aguas, como se describió en el capítulo 3, no solo expresa incumplimientos sobre la calidad del ambiente y del agua, sino que pone en jaque la propia existencia de los urus, su derecho a la vida (ADHMA, 2019; además De la Barra y colab., 2011). Las violaciones de múltiples derechos ponen en riesgo las garantías de supervivencia física y cultural de esos pueblos, como ante la minería en Colombia (Vargas Valencia, 2013).

Otro caso es el de los indígenas en aislamiento voluntario y que no han sido contactados. Se considera que en Bolivia existen 10 grupos, cinco de ellos son no contactados y cinco son pueblos en contacto inicial. En el grupo de los no contactados están toromonas, ayoreos, yuqui, pacahuara, incluyendo uno reportado en 2016 en un área de exploración petrolera en el noroeste del país, y que podría ser toromona o ese ejja<sup>14</sup>. En el segundo grupo se encuentran los chacobo, araona, yu-

13 Brasil: reserva yanomami es invadida por 20.000 mineros ante inacción del gobierno de Bolsonaro, S. Branford, Mongabay, 2 de septiembre de 2019, <https://es.mongabay.com/2019/09/brasil-invasion-mineros-reserva-yanomami/>

14 Díez Astete, A. Situación actual de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario en Bolivia: caso Tacana II. FOBOMADE. 2017, <http://fobomade.org.bo/2017/08/02/situacion-actual-de-los-pueblos-indigenas-en-aislamiento-voluntario-en-bolivia-caso-tacana-ii/>

racaré, mosetene y tsimané<sup>15</sup>. La mayor parte de estos pueblos tienen sus territorios de vida al interior o alrededor de importantes áreas de conservación como son las áreas protegidas Madidi, Kaa Iya, Pilón Lajas (ADHMA, 2019).

La Constitución boliviana establece que “naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva” (art. 31.I). También reconoce que “gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan” (art. 31.II). En el capítulo 3 se aborda los incumplimientos de esos derechos constitucionales. El avance de la exploración petrolera no solo afectará derechos referidos al ambiente, áreas protegidas y otros, sino que la propia condición de pueblo indígena no contactado está en jaque.

Existen advertencias sobre estos extremos, por ejemplo, en actividades petroleras que amenazan pueblos no contactados dentro de la Reserva del Kugapakori Nahua Nanti (departamentos de Cusco y Ucayali, Perú)<sup>16</sup>. Un caso muy conocido es el de los taromenane y tagaeri, que ocupan distintas zonas en la Amazonía de Ecuador, incluyendo la del Parque Nacional Yasuní. Esa presencia conllevó a aplicar un mandato constitucional que impide la explotación petrolera en el territorio. Para imponer ese extractivismo, el gobierno de Correa aplicó en 2013 distintas medidas administrativas, tales como generar nuevos mapas para “mover” a otro lugar a esos grupos indígenas y de esa forma permitir la actividad petrolera en el área<sup>17</sup>. Esos pueblos ya contaban con una demanda de medidas cautelares contra el gobierno para que asegurara su protección (en el marco de un proceso con la CIDH en 2006), pero la situación sigue sin resolverse de un modo adecuado<sup>18</sup>.

A todo esto, se suman los incumplimientos de los derechos de personas, comunidades u organizaciones que defienden la calidad del ambiente, su salud o sus terri-

15 Ibid.

16 Esas actividades ponen en riesgo todos los derechos de los pueblos no contactados en esa región, según advirtió el Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas en carta del 1 de marzo de 2013, dirigida al gobierno de Perú.

17 Cartografía colonial y racismo socio-ambiental: el caso de los pueblos Tagaeri y Taromenane en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, S. Cevallos Vivar y F. Cevallos Vivar, Iberoamerica Social, Sevilla, 28 de diciembre de 2018, <https://iberoamericasocial.com/cartografia-colonial-y-racismo-socio-ambiental-el-caso-de-los-pueblos-tagae-ri-y-taromenane-en-el-parque-nacional-yasuni-en-ecuador/>

18 Véase, por ejemplo, el informe La amenaza del Decreto Ejecutivo No 751 a la supervivencia de los pueblos en aislamiento Taraeri Taromenane, encaminado por Fundación Aldea y Pachamama, Quito, 2019, <http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/xlrkle2na9xf47n3jl672j67j53wln>

torios, lo que corresponde a la segunda dimensión esquematizada en la Figura 4.2. En esos casos las violaciones están en que se evita, por ejemplo, que se denuncien los impactos sociales o ambientales. Ocurren, por tanto, dos recortes simultáneos de los derechos, ya que, por un lado, se invisibiliza u oculta el deterioro social o ambiental y, por otro, se busca impedir que se hable, denuncie o proteste sobre ello. Esto impacta no solamente a las comunidades locales, sino a grupos organizados que actúan a nivel nacional. En el capítulo 3 se presentaron varios casos que afectan a los defensores del ambiente en Bolivia, y que cubren todo el amplio abanico de derechos sobre el acceso a la información o la libertad en analizarla y comunicarla, a las situaciones extremas de hostigar a líderes ciudadanos o reprimir movilizaciones ciudadanas (véase, además, Amnistía Internacional, 2019).

En otros países esta situación ha sido repetidamente señalada (véase, por ejemplo, OCMAL 2011; Díaz Roco, 2019) y se manifiesta de distintas maneras. En Ecuador desde el gobierno se ha hostigado a líderes ciudadanos, se actuó contra ONG (incluyendo la clausura de una organización que hacía seguimiento a las concesiones petroleras), se judicializaron a líderes indígenas y sus organizaciones (CEDHU y FIDH, 2010). En casos extremos se ha acusado a los líderes locales de “terroristas”, con toda la carga legal y cultural que esto implica (un ejemplo de ello fueron los dirigentes waorani de la Amazonía, acusados de terrorismo por la empresa petrolera y luego sobreseídos<sup>19</sup>). Situaciones similares ocurren en Perú (por ejemplo, Justicia Viva e IDL, 2012), como la persecución a la ONG Grufides y a su líder, Marco Arana, por sus actividades de denuncia a la minera Yanacocha en el norte del país (sufrieron espionaje, hostigamiento, judicialización, etc.; Kamphuis, 2012). En Argentina se reporta el espionaje y seguimiento a líderes ciudadanos y la criminalización de indígenas<sup>20</sup>.

En Brasil se ha espiado y hostigado a grupos indígenas que hacían seguimiento a la minera Vale o a los impactos de la construcción de la represa de Belo Monte (Montgomery y colab., 2015). Estas personas que verificaban el accionar de la empresa han sido filmadas clandestinamente, grabadas con micrófonos ocultos, intervinieron sus teléfonos y correos electrónicos, etc. Para esto se recurrió a contratistas privados o pagos a funcionarios de la agencia de inteligencia brasileña (ABIN). Los

19 Sobreseídos siete waoranis acusados de terrorismo, El Telégrafo, Quito, 25 de marzo de 2013, <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/sobreseidos-siete-waoranis-acusados-de-terrorismo>

20 Por ejemplo, la criminalización de mapuches en el sur de Argentina; Derechos vulnerados en el Sur, D. Aranda, Página 12, B. Aires, 22 abril 2013, <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218515-2013-04-22.html>

ataques a líderes como golpizas, secuestros e incluso el asesinato son hechos extremos que ocurren sobre todo en Colombia y Brasil y se comentarán más adelante.

Considerando la evidencia disponible tanto de incumplimientos vinculados con los impactos de los extractivismos como aquellos relacionados a los actores sociales que los enfrentan, es posible concluir que los derechos relacionados con la calidad de vida, los territorios y el ambiente están comprometidos. Así lo afirma el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio”<sup>21</sup>. Hay una relación de interdependencia entre ambiente y derechos humanos, lo que explica que la degradación ambiental deba ser entendida como una degradación de los derechos. A su vez, asegurar los derechos humanos requiere de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible<sup>22</sup>.

Es importante tener presente que cualquier violación es grave. No puede establecerse una jerarquía entre los derechos que sirva para justificar eso, aunque esa deformación se está extendiendo. Sostener que los incumplimientos de los derechos al acceso a la información serían menos graves y, por tanto, más tolerables que aquellos que censuran la opinión pública, y estos a su vez tolerables ante la violencia física o los asesinatos, es inadmisibles. Los derechos tienen la misma relevancia, jerarquía e importancia, aunque, sin duda, las consecuencias de las vulneraciones tienen muy distintas consecuencias.

Es más, los derechos enfocados en la protección ambiental son indispensables para asegurar la salvaguarda de los demás derechos de las personas. Si se cumple la protección de la Naturaleza y se asegura la calidad del ambiente, se generan condiciones para atender los demás derechos, tales como la calidad de vida o la salud de los humanos (Raftopoulos, 2017). Dicho de otro modo, la integridad del ambiente es una precondition para asegurar los derechos humanos. Por tanto, atender los derechos de la Naturaleza no está en contra ni es de menor relevancia o jerarquía que los derechos de las personas, sino que transitan sendas paralelas y se necesitan mutuamente.

21 Consejo de Derechos Humanos, Informe preliminar del experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, A/HRC/22/43, 2012.

22 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/37/59, 24 de enero de 2018.



Las limitaciones para asegurar la cobertura de derechos reflejan las debilidades de lo que se caracteriza como Estado de derecho en muchos países. La información internacional encuentra relaciones directas entre el número de defensores ambientales asesinados y la calidad del Estado de derecho de cada país, y también con la superficie bajo uso agropecuario (Butt y colab., 2019). Dicho de otra forma, allí donde la calidad de la cobertura legal es más débil o donde más ha avanzado la frontera agropecuaria, es más probable que ocurran asesinatos de este tipo. A nivel global se estima que solamente un 10% de esos asesinatos resulta en castigos a los culpables, lo que refleja la gravedad de la impunidad (Butt y colab., 2019).

Como ya se mencionó anteriormente, en todas las formas de extractivismos hay ejemplos de incumplimientos de las salvaguardas de los derechos. Estos suceden tanto en aquellos extractivismos controlados por las empresas privadas, sean nacionales o transnacionales, como en los que dependen del Estado como se observa con las compañías petroleras estatales. Más allá del control sobre la propiedad, el acceso o la comercialización de los recursos naturales extraídos, toda violación de los derechos expresa una incompetencia del Estado no solo del Poder Ejecutivo, como ocurre con los casos de excesos policiales, sino también de los otros poderes del Estado. Esto afecta al Poder Judicial, por no ser capaz de impedir hechos como esos, por generar situaciones de impunidad o por su sumisión al poder político partidario. También expresa serias limitaciones del Poder Legislativo en poder controlar a los otros órganos, en asegurar las reformas legislativas necesarias para fortalecer los derechos o en ser un espacio de expresión de las demandas ciudadanas.

La impunidad puede deberse a múltiples factores, tales como la incapacidad o ineffectividad de la policía y juzgados en investigar los casos, identificar a los responsables, juzgarlos y penalizarlos. También incide en esto que el propio Estado ejerce violencia contra los defensores del ambiente, o personas dentro del Estado tienen estrechos vínculos personales, familiares o empresariales con lo que ejercen esa violencia. Tampoco puede olvidarse el papel de la corrupción sea en la policía o los juzgados. Finalmente, como muchos enclaves extractivos se ubican en sitios remotos, allí la presencia estatal es acotada o nula.

A partir de los casos de incumplimientos analizados más arriba, y los revisados para Bolivia en el capítulo anterior, es posible avanzar en varias conclusiones. La Tabla 4.1. es una lista de derechos basada en las categorías usualmente reconocidas y adaptada a algunas de las particularidades de la CPE boliviana, además incorpora compromisos derivados de los convenios internacionales y el reconocimiento de los

**Tabla 4.1**

**Violaciones de derechos de las personas y la Naturaleza en los extractivismos** (Enumeración resumida de derechos claves basados en la Declaración Universal de los Derechos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), el Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), las particularidades de la CPE de Bolivia y los derechos de la Naturaleza reconocidos en Ecuador. Se incluye la información resumida en la Tabla 3.3. y los nuevos ejemplos ofrecidos en el presente capítulo para América del Sur).

		TIPOS DE EXTRACTIVISMOS			Área soporte	Redes conexión
		Minero	Petrolero	Agropecuario		
DERECHOS DE LAS PERSONAS						
Civiles y políticos	Vida	+	+	+	+	+
	Integridad personal	+	+	+	+	+
	Igualdad	+	+	+	+	+
	Libertad	+	+			+
	Honor, dignidad, identidad	+	+	+	+	+
	Información	+	+	+	+	+
	Políticos	+	+	+	+	+
	Justicia	+	+	+	+	+
Sociales	Seguridad y asistencia social	+		+	+	+
	Familia, matrimonio, maternidad	+		+		
	Propiedad	+	+	+	+	+
	Salud	+	+	+	+	+
	Educación	+	+	+		
	Vivienda	+	+			
	Alimentación	+	+	+		
	Agua	+	+	+	+	+
	Protección consumidores	+	+	+		
	Trabajo	+	+	+	+	+
	Impedimento esclavitud, trabajo forzado, etcétera	+	+	+	+	+
	Condiciones de trabajo, protección, seguridad, salud	+	+	+	+	+
Pueblos indígenas	Identidad cultural indígena	+	+	+	+	+
	Autonomía y autogobierno, reconocimiento de instituciones y entidades territoriales	+	+	+	+	+
	Integralidad del territorio, titulación de tierras, protección de lugares sagrados	+	+		+	+
	Ambiente sano, aprovechamiento adecuado de los ecosistemas	+	+	+	+	+
	Consulta previa, obligatoria y concertada; consentimiento previo, libre e informado	+	+	+	+	+

La tabla continúa en la siguiente página...

... viene de la anterior página.

		TIPOS DE EXTRACTIVISMOS			Área soporte	Redes conexión
		Minero	Petrolero	Agropecuario		
Pueblos indígenas	Gestión territorial autónoma, uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales	+	+	+	+	+
	Protección y respeto de pueblos en peligro de extinción, no contactados o en aislamiento voluntario	+	+			+
Ambiente	Ambiente sano, saludable, limpio y sin riesgos	+	+	+	+	+
	Agua	+	+	+	+	+
Defensa de los derechos	Actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia	+	+	+	+	+
<b>DERECHOS DE LA NATURALEZA</b>						
Proteger a la Naturaleza y Pachamama, asegurando la supervivencia de los seres vivos no-humanos		+	+	+	+	+
Derecho a la restauración		+	+	+	+	+

derechos de la Naturaleza. Se indican las violaciones de los derechos, integrando los casos de Bolivia y la información disponible de los países vecinos. El resultado evidencia la diseminada vulneración de los derechos alrededor de los extractivismos no solamente en Bolivia, sino que se ha ofrecido al menos un caso para cada país sudamericano. Del total de 32 derechos enumerados, se han detectado casos de incumplimientos para todos ellos en los extractivismos mineros, seguidos por los petroleros (30) y agropecuarios (28); y se repite las violaciones en las áreas de soporte y redes de conexión. Las vulneraciones involucran a los derechos de las personas, pero también a los de la Naturaleza tanto en la existencia, mantenimiento y regeneración de la vida (entendida como Naturaleza, ambiente, Madre Tierra o Pachamama) como los de restauración (Gudynas, 2014).

Esos extendidos incumplimientos explican que se apele cada vez más a las cortes internacionales. En la CIDH se registró un aumento continuo de acciones entre 1997 y 2017, en todos los mecanismos que esta ofrece (audiencias por país, regionales y medidas cautelares) (Hincapié, 2019). El mayor número de casos en esa corte corresponde a Colombia, seguida por Perú, Honduras y Ecuador.

## Impactos locales y efectos derrame sobre los derechos

Los incumplimientos de los derechos en los extractivismos se amplían y reproducen gracias a una serie de efectos derrame que flexibilizan y debilitan ese marco. No sólo se modifican políticas públicas, sino que, además, se erosionan los apegos a la idea de derechos. Se ha indicado anteriormente varios ejemplos: contar con normas que aseguren los derechos a la consulta y participación, pero estas no se cumplen, o mantener los derechos a la calidad ambiental, empero flexibilizar su cumplimiento. En esta sección se considerarán en detalle algunas de estas cuestiones.

Las flexibilizaciones en las regulaciones, exigencias y controles tanto sociales, especialmente laborales, como ambientales son conocidos efectos derrame asociados a los extractivismos. Desde el punto de vista de empresas y Estados extractivistas, se insiste en que esos controles son “obstáculos” o “trabas” para la inversión y el crecimiento económico y, por lo tanto, se intenta actuar encima de ellos. Entre los casos más conocidos está el de las licencias ambientales “express” en Colombia y el llamado “paquetazo ambiental” en Perú<sup>23</sup>.

Para la situación boliviana se describe una flexibilización para los sectores hidrocarburos y minero, y que además afectó a las regulaciones sobre las áreas protegidas, en tanto dentro de ellas están muchas de las actuales fronteras extractivistas. En la Tabla 4.2. se resumen algunos de los cambios principales. En este proceso, el Estado que debía ser el garante de los derechos al ambiente se vuelve en el promotor de cambios que van en sentido contrario.

Efectos derrame análogos se observan en Bolivia en las políticas y normas que deberían asegurar la participación, información y consulta, y en especial con los pueblos indígenas dado los particulares derechos concedidos por la CPE. Estos derrames que afectan la consulta para los emprendimientos en hidrocarburos y minería se resumen en la Tabla 4.3.

En Bolivia la consulta previa es un derecho constitucional, en especial para los pueblos indígenas, y ese mandato está reforzado por los compromisos asumidos por el Convenio 169 de la OIT y la normativa nacional. Sin embargo, esas condiciones han sido afectadas de varias maneras.

23 Véase, por ejemplo, para Colombia Los seis temores sobre las licencias ambientales “expres”, A. Bermúdez Liévano, La Silla Vacía, Bogotá, 24 de septiembre de 2014, <https://lasillavacia.com/historia/los-seis-temores-sobre-las-licencias-ambientales-expres-48650>; y para Perú, 5 puntos para entender el impacto del “paquetazo ambiental” en la fiscalización, C. Mora, Sociedad Peruana Derecho Ambiental, Actualidad Ambiental, Lima, 9 de agosto de 2015, [www.actualidadambiental.pe/5-puntos-para-entender-el-impacto-del-paquetazo-ambiental-en-la-fiscalizacion-ambiental/](http://www.actualidadambiental.pe/5-puntos-para-entender-el-impacto-del-paquetazo-ambiental-en-la-fiscalizacion-ambiental/)

**Tabla 4.2** | Modificaciones realizadas a la normativa ambiental para su flexibilización en el periodo 2006-2019.

SECTOR Y NORMATIVA PRINCIPAL	NORMATIVA MODIFICATORIA	IMPLICACIONES SOBRE DERECHOS REFERIDOS AL AMBIENTE
<b>ÁREAS PROTEGIDAS</b>		
DS 24781 (1997). Reglamento General de Áreas Protegidas	DS 2366 (2015)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas (art. 2), precisando y calificando una aparente contradicción en las disposiciones del Reglamento General de Áreas Protegidas.</li> <li>• Establece un porcentaje de inversiones para el fortalecimiento del área protegida intervenida proveniente de los recursos de la inversión hidrocarburífera (art. 4).</li> <li>• Se establece la preferencia en la aplicación de esta norma (Disposición final única).</li> </ul>
	DS 3549 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convierte la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en solamente una recomendación (art. 3).</li> </ul>
	Ley 535 (2014), minería y metalurgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite en áreas protegidas “siempre que sea compatible con el Plan de Gestión” (art. 220).</li> </ul>
<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>		
DS 24335 (1996). Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos	DS 29595 (2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se acortan plazos para la revisión, evaluación, presentación de aclaraciones, complementaciones y enmiendas y la consiguiente emisión de las licencias ambientales en el sector hidrocarburos (art. 19 y Anexo 2).</li> <li>• Se introduce un procedimiento de modificaciones, aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas a las licencias ambientales (arts. 127-130 y arts. transitorios 1-2).</li> </ul>
	DS 2400 (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incorpora un título sobre descargas líquidas, atmosféricas y suelos; precisa disposiciones que regulan este aspecto (art. 2).</li> <li>• Se detallan y cambian los límites permisibles para descargas líquidas, atmosféricas y sobre suelos (art. 3).</li> </ul>
DS 24176 (1995). Reglamento de Prevención y Control Ambiental, Anexo 2	DS 1485 (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establece los proyectos de distribución de gas en la categoría 4, es decir, que solo amerita certificado de dispensación y no así un estudio de evaluación de impacto ambiental (arts. 1-2).</li> </ul>
	DS 2992 (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se asigna categoría 4 a actividades exploratorias geoquímicas, geofísicas y geológicas de superficie (art. 2).</li> <li>• Se asigna categoría 3 o 4 a actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos: campamentos base, campamentos volantes, helipuertos y zonas de descarga (arts. 4 y 5).</li> </ul>
	DS 3549 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigna la función de autoridad competente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en lugar que sea la Gobernación, cuando la obra o proyecto es promovido por presidencia, cuando el artículo original plantea situaciones de obras transfronterizas (art. 2).</li> </ul>
Ley 1777 (1997). Código Minero	Ley 535 (2014), minería y metalurgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levanta restricciones sobre zonas ambientales vulnerables (cabeceras de cuenca, lagos, ríos embalses, vertientes, glaciales) (art. 93).</li> </ul>

\* Existen dos sentencias constitucionales que rechazan acciones de tutela (Sentencia Constitucional Plurinacional 0089/2016-S2 Expediente 12755-2015-26-AP y Sentencia Constitucional Plurinacional 1079/2017-S1 Expediente 20564-2017-42-AP) respecto de este DS.

Por ejemplo, las disposiciones de la Ley 535 de minería de 2014 respecto a consulta previa en materia minera (Título VI)<sup>24</sup> y su implementación vulneran este derecho. En las consultas previas realizadas para actividades mineras<sup>25</sup>, el propio Estado evidenció la falta de información sobre los impactos de la minería<sup>26</sup>; aspecto que, si bien va en contra de los estándares del derecho a la consulta, no impide que el Estado valide este proceso como un paso para legalizar la explotación minera.

En la normativa de la consulta previa en hidrocarburos, la norma que regula el sector (Ley 3058 de hidrocarburos, 2005) incluye una sección de “derechos de los pueblos campesinos, indígenas y originarios” (Título VII) que asume como marco el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, la modificación en reiteradas ocasiones de la reglamentación de esta norma plantea preocupantes limitaciones a este derecho. Una acción de inconstitucionalidad que la Defensoría del Pueblo (2016) presentó evidencia vulneraciones tanto a la constitución política como a instrumentos internacionales de derechos humanos.<sup>27</sup> Estas vulneraciones resultan en tergiversaciones al carácter libre del derecho puesto que las autoridades definen arbitrariamente plazos y modalidades del proceso (ADHMA, 2019).

Otro conjunto de efectos derrame discurren por permitir o tolerar los ataques, hostigamientos y persecuciones a líderes y organizaciones ciudadanas. Por ejemplo, se los presenta como agitadores, radicales (por derecha o por izquierda), extranjerizados, y de este modo se justifican acciones judiciales civiles o penales. En Bolivia, la Ley 367 de 2013 penaliza hasta con ocho años de cárcel el “avasallamiento” de las concesiones mineras.

24 La ley excluye del cumplimiento de la consulta previa a las operaciones mineras que comprendan solo prospección y exploración (art. 207.II), así como “para las solicitudes de nuevos contratos administrativos mineros en áreas libres que se presenten a partir de la publicación de la presente Ley” (art. 207.III).

25 Entre 2015 y 2017 el Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático acompañó 309 procesos de consulta previa en el sector minero. La mayor parte de las consultas realizadas fueron con empresas privadas (183) y cooperativas mineras (123). Las consultas para explotar oro fueron las más numerosas (125) seguidas de las consultas para extraer zinc (47). Véase <https://www.oep.org.bo/consultaprevia/>

26 El Informe técnico de observación y acompañamiento del proceso de consulta previa y solicitud de la cooperativa minera aurífera Tunqui Olivo Ltda. – La Paz en sus conclusiones indica que “se informó que el uso del mercurio será restringido y se empleará una retorta para recuperar el mercurio de la amalgama y el oro fundido. Sin embargo, esta afirmación no contó con sustento técnico que permita a los comunarios de Monte Olivo informarse sobre los impactos que ocasionará la explotación minera”. A pesar de este señalamiento de una entidad estatal responsable de acompañar esa consulta, en el mismo documento se aprueba el informe dando por concluida y válida la consulta. Este tipo de situaciones se repite en otros informes de consultas mineras. Se han identificado al menos los siguientes casos: Cooperativa Minera Aurífera El Magnate Ltda. PEROLANI-22, Cooperativa Minera Unión Progreso Upmin LTDA, 34 Empresa Unipersonal Petrona Condori Salgado, Cooperativa Minera Río Cedro Mayo LTDA, Empresa Unipersonal Tarapo Kory SRL, Empresa Fritabol SRL.

27 Defensoría del Pueblo (2016) Situación de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz: Defensoría del Pueblo; en: <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/situacion-de-los-pueblos-indigenas.pdf>

**Tabla 4.3** Transformaciones normativas respecto de la consulta previa para su flexibilización en el periodo 2006-2019.

SECTOR Y NORMA	IMPLICACIONES SOBRE EL DERECHO A LA CONSULTA
<b>HIDROCARBURÍFERO</b>	
DS 29124 (2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acorta los plazos de 60 a 30 días para la elaboración de la resolución biministerial que viabiliza el pago que posibilita la realización de la consulta (art. 2).</li> <li>• En base al principio de preclusión hace del resto de los plazos establecidos en el proceso de consulta plazos perentorios (art. 4).</li> </ul>
DS 29574 (2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transforma un plazo máximo para fijar una reunión de análisis en un plazo máximo para elaborar y aprobar una propuesta del proceso de consulta (art. 2, II).</li> <li>• Incluye un plazo máximo para consulta y participación (art. 2, III).</li> <li>• Reduce el plazo máximo adicional para la conclusión de la consulta (art. 2, IV).</li> </ul>
DS 2298 (2015)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se establece un procedimiento administrativo que no contempla las características sociales, culturales y organizativas de la mayoría de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, además de definir un plazo para dichos procedimientos (art. 2, I).</li> <li>• Se precisan plazos y reduce esa parte del procedimiento por segunda ocasión (art. 2, II).</li> <li>• Establece que la sola asistencia de representantes de pueblos indígenas permite dar continuidad a la consulta y participación (art. 3, I).</li> <li>• Tergiversa la consulta al transformar la asistencia a eventos de los representantes como válida para la continuidad del proceso de consulta, y le otorga a la Autoridad Competente Nacional la facultad de determinar, en caso de no producirse el diálogo con las comunidades afectadas, mediante resolución administrativa, la definición del proceso de consulta, estableciendo que esta definición sea incorporada en el trámite de obtención de licencia ambiental (art. 3, II).</li> <li>• Destaca garantías para las empresas y enfatiza la obligación de la Autoridad Competente en relación a la viabilidad de los proyectos hidrocarburíferos (Disposición Adicional Segunda).</li> </ul>
DS 2195 (2014)^^^	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fija un valor porcentual del valor del proyecto como monto máximo de compensación financiera por impactos socioambientales en territorios indígenas o campesinos, tierras comunales indígenas y campesinas (art. 3, II), su uso y mecanismos de ejecución (art. 5-6). Todas estas actividades susceptibles de otorgar compensación tienen como condicionante que el nivel de impacto sea negativo, directo, acumulado y de largo plazo. No consideran los impactos indirectos, inducidos, temporales u otros que podrían resultar de mayor importancia o efecto que aquellos que se determinarían a través de este decreto.</li> <li>• Estos parámetros tergiversan la noción de compensación y de consulta.</li> </ul>
<b>MINERÍA</b>	
Ley 535 (2014), minería y metalurgia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se establece consulta para los derechos mineros otorgados con anterioridad a la Ley (art. 207, IV). En caso de no llegarse a acuerdo, el Ministerio de Minería y Metalurgia define (art. 215, I).</li> </ul>

\* Existen dos sentencias constitucionales que rechazan la acción de inconstitucionalidad (Sentencia Constitucional Plurinacional 0439/2015-CA Expediente 13290-2015-27-AIA) y acción de tutela (Sentencia Constitucional Plurinacional 0089/2016-S2 Expediente 12755-2015-26-AP) respecto de este DS.

\*\* Existen dos sentencias constitucionales que rechazan la acción de inconstitucionalidad (Sentencia Constitucional Plurinacional 0283/2015-CA Expediente 11564-2015-24-AIA) y acción de tutela (Sentencia Constitucional Plurinacional 0089/2016-S2 Expediente 12755-2015-26-AP) respecto de este DS.

En otros países también está en marcha la propuesta de ampliar la delimitación del terrorismo para incorporar a acciones ciudadanas que denuncien o resistan a las apropiaciones de los recursos naturales.

Desde el punto de vista de los líderes locales los efectos de todas esas acciones son demoledores. Por ejemplo, si un líder comunario enfrenta un proceso judicial queda atrapado en esos trámites, enfrenta los costos de contar con abogados que lo defiendan, puede sufrir medidas que le impidan viajar o le embarguen sus bienes, y todo ello se arrastra por años. Como otros comunarios observan esos padecimientos, muchos abandonan la militancia activa por miedo a sufrir las mismas consecuencias. De esa forma, la proliferación de la judicialización termina convertida en una poderosa arma que desempodera a la sociedad civil.

Otros efectos derrame atacan conceptos políticos básicos. Un ejemplo muy destacado ocurre en Bolivia sobre las ideas de Vivir Bien, lo que genera diversas contradicciones entre esos postulados alternativos y los intereses extractivistas. La Ley Marco sobre Derechos de la Madre Tierra y del Desarrollo Integral para Vivir Bien tiene por objetivo “establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra” (art.1). Pero propósitos de este tipo son evidentemente incompatibles con permitir extractivismos de tercera generación, y más todavía con aceptar que irruman en áreas naturales protegidas. Algunos de estos problemas se analizaron en el capítulo 2 y en este se los complementa.

En la mencionada ley se postula la “eliminación gradual” de los organismos genéticamente modificados (art. 24, inciso 8), pero contrariamente se los legalizó a través de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (art. 19, II, 5); más recientemente el DS 3874 autoriza procedimientos abreviados para eventos de soya transgénica HB4<sup>28</sup> y se negocia con el sector agroindustrial eventos de maíz, caña de azúcar y algodón transgénicos<sup>29</sup> (Aprodeh y colab., 2019).

La ley sobre los derechos de la Madre Tierra plantea minimizar el avance de la frontera agrícola (art. 24, inciso 2), pero parte de la negociación de eventos transgé-

28 Gobierno promulga Decreto para evaluación de nuevos eventos transgénicos de soya, notiboliviarural.com, Santa Cruz, 18 de abril de 2019, <https://www.notiboliviarural.com/agricola/gobierno-promulga-decreto-para-evaluacion-de-nuevos-eventos-transgenicos-de-soya>

29 El agro propondrá 8 eventos transgénicos para 4 cultivos, El Mundo, 20 de enero de 2019, <http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=el-agro-propondra-8-eventos-transgenicos-para-4-cultivos>



nicos incluye la ampliación de la frontera agrícola en alrededor de 250.000 hectáreas<sup>30</sup>. También postula prohibir la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para su obtención (art. 24, inciso 11). Sin embargo, desde el 2018 el gobierno ha concertado con los agroindustriales la producción y la compra de biodiésel<sup>31</sup> como alternativa para reducir los crecientes costos y volúmenes de importación de combustible líquido.

La prohibición de “manera absoluta [de] la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal” (art. 25) es también otra orientación de la Ley 300 que ha sido en varias ocasiones obviada en su cumplimiento por acciones estatales. La acción más reciente es la aprobación del DS 3973 del 9 de julio de 2019 que establece que “en los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra”<sup>32</sup>.

Para el caso de hidrocarburos, la norma plantea que la exploración entre otras actividades hidrocarburíferas se realizarán “de forma progresiva, según corresponda con las tecnologías más adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales” (art. 26). Sin embargo, el 2018 se firmó un convenio con la empresa Camcabria para estudios para la exploración de gas no convencional o *tight gas* en la zona de Miraflores en el Chaco chuquisaqueño<sup>33</sup>.

Los efectos derrame también están presentes en los países vecinos, incluyendo distintas formas de flexibilización social, laboral y ambiental, desregulación de controles y fiscalización, y manipulaciones en la toma de decisión en las políticas públicas (esta situación se discute a detalle en Gudynas, 2015, con ejemplos de varios países).

30 Gobierno da luz verde para introducción de nuevos eventos transgénicos en soya, notiboliviarural.com, Santa Cruz, 19 de marzo de 2019, <https://www.notiboliviarural.com/agricola/gobierno-da-luz-verde-para-introduccion-de-nuevos-eventos-transgenicos-en-soya>

31 YPFB pacta compra con ingenios por \$us 106 millones y alista venta de etanol 97, El Deber, Santa Cruz, 9 de enero de 2019, <https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-pacta-compra-con-ingenios-por-us106-millones-y-alista-venta-de-etanol-97-20190108-7105.html>

32 Peralta Rivero, Carmelo (2019) Posibles efectos por la modificación del decreto supremo 26075 sobre tierras de producción forestal permanente, CIPCA, Notas, 10 de julio de 2019, <http://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/posibles-efectos-por-la-modificacion-del-decreto-supremo-26075-sobre-tierras-de-produccion-forestal-permanente>

33 Cedib advierte: YPFB no transparenta impactos del fracking y la búsqueda del tight gas, Opinión, Cochabamba, 1 de febrero de 2019, <http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2019/0201/noticias.php?id=280825>

## El concepto de violencia

En el análisis de los casos de Bolivia, así como en otros países, una y otra vez se observa que los incumplimientos de los derechos ocurren asociados a distintos tipos de violencia. En unos se imponen concesiones o actividades extractivas, a veces con enfrentamientos físicos con la policía, fuerzas de seguridad o incluso entre grupos locales. En otros se toman acciones para acallar las protestas, desde amenazas a la judicialización. En casos extremos se llega al asesinato de líderes locales o de manifestantes. Los emprendimientos extractivos se han facilitado, impuesto y consolidado de manera sistemática, a través de un conjunto de dispositivos que resultan del abuso de poder, tal como indica el colectivo Aprovech y otras organizaciones ciudadanas de la región andina (Aprovech y colab., 2018). Se señalan tres dispositivos: los que apelan a la fuerza física, a normas e instituciones y los que se deben a discursos.

Esto permite pasar a analizar el papel de la violencia en los incumplimientos de las salvaguardas de los derechos en los extractivismos. Como se adelantaba en la introducción, una de las antiguas acepciones del término aludía a las acciones contra el orden de la naturaleza. Siguiendo esa línea, pero a la vez reconociendo la necesidad de una definición que sea precisa y que además permita articularse con las concepciones de derechos humanos, es útil apelar a la que propone la Organización Mundial de la Salud, como ya se adelantó en el capítulo 1.

De acuerdo a la OMS, la violencia se refiere al “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug y colab., 2003: 5).

La conceptualización de la OMS se emplea únicamente para las acciones que tienen una intención y por ello quedan excluidos los accidentes. La definición aplica a acciones intencionales, pero más allá de sus resultados; por lo tanto, califican como violencia incluso aquellos actos que, por ejemplo, apuntan a reprimir manifestantes aun si no se logra ese propósito. Del mismo modo, también ocurre violencia cuando hay omisiones; el acto de violencia es precisamente dejar de hacer algo, como puede ser la pasividad policial o judicial ante las agresiones que reciben las comunidades locales.

Se sitúa en un mismo nivel la “fuerza física”, como cuando un policía golpea a un campesino, y el uso del “poder”, como aquellas acciones propias de ámbitos estatales

o empresariales (son los casos de las presiones que pueden ejercer ministros o gerentes, por ejemplo). La inclusión del concepto de poder es muy importante en los extractivismos, ya que muchos emprendimientos son defendidos desde posiciones de gran poder y se imponen por medio de violencia que no necesariamente es física. Esto es además útil para recordar situaciones particulares en las que están estrechamente asociados el poder político y el empresarial, como ocurre con directores o gerentes de empresas petroleras estatales en algunos países. Estos actores ostentan un poder político basado en el agrupamiento político gobernante que controla al Estado y, por ello, también gozan del poder de controlar compañías que manejan enormes presupuestos y pueden poseer miles de empleados. De esta manera, al incorporar esa noción del poder se puede reconocer los efectos de amenazas, hostigamientos o intimidaciones.

El concepto se aplica tanto a acciones físicas como aquellas psicológicas, las prácticas de privación o las que entorpecen de alguna manera al desarrollo de las personas. La violencia no está restringida a las formas convencionales como una golpiza que lesiona a una persona, por ejemplo la tortura policial. El propósito de esa ampliación, aclara la OMS, es reconocer los actos violentos que no causan lesiones o muertes, pero afectan sustancialmente a las personas o comunidades incidiendo sobre su salud, su bienestar psicológico o su desarrollo personal. Estos efectos pueden ser inmediatos o latentes o eclosionar después de los maltratos que los ocasionaron.

Esta condición y la incorporación de la noción de poder hacen necesario reconocer como formas de violencia el ataque a la dignidad o autoestima de las personas, a sus identidades culturales o sexuales, a cómo conciben y se relacionan con sus territorios o a cómo entienden su salud y bienestar.

La tipología de la OMS reconoce las violencias autoinflingidas, las que ocurren dentro de la familia o pareja, dentro de una comunidad y finalmente la que es colectiva. Para los casos que involucran a los extractivismos las más relevantes son las violencias colectivas que, según la OMS, se expresan en el ámbito social, político y económico, además se aumentan las dimensiones étnicas, religiosas, territoriales y ambientales (Figura 4.3.). La naturaleza de los actos de violencia puede ser física, sexual, psíquica, o puede operar en la privación o descuido.

En un sentido más amplio, algunos se refieren a violencia estructural para los casos en los que el daño o la amenaza proviene de condiciones sociales o instituciona-



**Figura 4.3** | Tipos de violencia. Basado, con modificaciones, en la conceptualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según Krug y Colab. (2003).

les, como las que desembocan en la pobreza o la marginación (véase la discusión en Tortosa, 2003). Aunque esta perspectiva no es el centro del análisis de esta revisión, tampoco se la relega, ya que los extractivismos en muchos casos tanto aprovechan como producen condiciones de desigualdad.

## Violencias en los extractivismos

Existen múltiples evidencias de la ocurrencia de la violencia en los extractivismos y que puede escalar al conflicto bélico como ilustra uno de los casos más conocidos: guerra de guerrillas, guerra civil o intervenciones militares alrededor de los llamados “diamantes de sangre” o la minería en África. En Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Angola la extracción y el control del comercio de diamantes financiaban la guerra, pero era una de las razones para explicarla (Tardiff, 2013). Aunque el análisis en detalle del ejercicio de la violencia en los extractivismos es relativamente reciente, la información que se está acumulando apunta en el mismo sentido (véase los ensayos en Peluso y Watts, 2001).

En el caso de los extractivismos, las violencias ejercidas involucran varias dimensiones a la vez. Por ejemplo, cuando se impone por la fuerza una concesión minera se está ejerciendo violencia en aspectos étnicos (negando territorialidades de los pueblos originarios), religiosa (excluyendo los reclamos en defensa de los *apus*), económicas (al perderse las formas de vida tradicionales), políticas (excluyendo a

los grupos locales en la información y toma de decisiones), ambientales (destruyendo la biodiversidad o cuencas hidrográficas) o sociales (deteriorando la salud pública). La violencia ocurre al imponer una concesión extractiva, en la operación de un enclave, como también en las redes de conexión y sus áreas de soporte.

Estos y otros hechos además muestran que la violencia se ubica en lugares precisos; no es una condición desvinculada del espacio. Es decir, la violencia es importante en la construcción de territorialidades extractivistas y por ello siempre está atada a una geografía (sobre la geografía de la violencia, véase por ejemplo a Springer, 2011).

La imposición de los extractivismos discurre en varias dimensiones simultáneamente. Por ejemplo, cuando se ejerce violencia física para imponer una concesión extractivista a un grupo étnico al mismo tiempo se están excluyendo sus sensibilidades y creencias religiosas, como puede ser “matar” un *apu* para imponer una minera.

Las afectaciones a la salud también expresan violencia, existen múltiples casos de contaminación de suelos y aguas por la minería tradicional de plata, estaño, zinc, etc., por ejemplo, en los departamentos de Oruro y Potosí y en nuevas regiones de avance de la minería de oro en La Paz, Beni y Pando.

La violencia física se manifiesta cuando la policía, militares o fuerzas de seguridad privada golpean a manifestantes, los encarcelan o torturan. Pero hay además todo tipo de violencias psicológicas que van desde tratar a los comunarios como ignorantes o animales, a transformar sus sensibilidades y espiritualidades. Una evaluación de esos efectos en las explotaciones petroleras en la Amazonía de Ecuador justamente reveló esos aspectos psicológicos de la violencia, ya que se alteraban sensibilidades, espiritualidades y tradiciones culturales (Beristain y colab., 2009). La violencia sexual se ha vuelto evidente ya que muchos de los líderes locales contra los extractivismos son mujeres, por ello se las ataca por su género. También está la violencia que opera en la economía, cuando los extractivismos generan la imposibilidad de continuar con usos productivos agropecuarios tradicionales.

La violencia contra las mujeres tiene múltiples facetas, desde la estigmatización y deslegitimación que se promueve contra las dirigentes que protestan, esto sucedió con las mujeres que actuaron en defensa de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía frente a la exploración de hidrocarburos en el departamento de Tarija, hasta el vínculo de redes de trata y tráfico de mujeres y niñas hacia las zonas mineras, por ejemplo, en Oruro o en la frontera boliviana con Perú.

La represión violenta de las movilizaciones ciudadanas contra los extractivismos se ha vuelto corriente en países como Brasil, Colombia y Perú, pero también en Bolivia. No se puede dejar de mencionar la represión en Chaparina a la VIII Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2011, que se resistía a la construcción de la carretera en el TIPNIS (la marcha se describe en Guzmán, 2012). Una comunaria que participaba en esa movilización contó que con la llegada de los policías “todo el mundo corrió, y estaban largando gases lacrimógenos, así, con unas como ametralladoras. Yo corrí, quise pasar el alambre y no pude: me agarraron, vino un policía y me agarró. Yo luché, sí, harto para poder defenderme ¿no?, para poder escapar. Porque ni siquiera intentamos flecharlos, esas cosas [...] Me caí boca abajo y me pisaron” (testimonio rescatado por Rivera Cusicanqui, 2018: 16).

Otro caso extremo de violencia ocurrió por la imposición de la explotación minera en Mallku Khota (norte de Potosí) en 2012, que derivó en enfrentamientos con la policía con un saldo de decenas de heridos y una persona muerta. Este proyecto además conllevó violencia cultural, pues el cerro y la laguna a ser afectados tenían un carácter sagrado para los *ayllus* de esa zona.

En cuanto a los hidrocarburos, en la comunidad guaraní Takovo Mora, en el Chaco de Santa Cruz, se recurrió a la violencia policial para imponer el ingreso de actividades petroleras. En una refriega ocurrida en 2015, al menos seis comunarios guaraníes resultaron heridos, se actuó contra los movilizados, incluidos mujeres y niños, se ejerció violencia psicológica y se los encarceló.

Desde una mirada histórica, la Guerra del Gas de 2003 en Bolivia expresa una agudización de esa conflictividad en la que el extractivismo encuentra su correlato en las resistencias ciudadanas a las estrategias neoliberales. Tanto ese conflicto como la Guerra del Agua en Cochabamba son antecedentes de gran importancia en el proceso constituyente boliviano (véase Dangl, 2007; VV.AA., 2013).

Los problemas por los extractivismos se mantienen por años y pueden estallar en episodios de violencia extrema. Esto sucedió en la llamada matanza de Bagua, en la Amazonía de Perú, en 2009. En un contexto de conflicto por incumplimientos de los derechos al territorio, participación, ambiente, etc., se registró un choque muy violento entre indígenas y policías, murieron 33 personas, y a esto le siguió un tortuoso proceso judicial (ver los ensayos en Zambrano, 2017). Incluso este juicio, en el cual fueron exonerados los indígenas acusados, significó incumplimientos de distintos derechos (Cerqueira y Salazar, 2017).

En otros países las formas extremas de violencia se han vuelto cotidianas. Esto sucede en Colombia. Tomando al sector petrolero como ilustración de la situación, se afirma que sus trabajadores están entre los que más sufrieron violaciones a sus derechos a la vida, integridad y libertad entre 2001 y 2011 (49 detenciones, 2 desapariciones, 6 secuestros, 8 atentados, 9 heridos, 25 asesinatos y 68 amenazas de muerte; CINEP 2012). Pero a la vez, las empresas petroleras (y las mineras) han sido denunciadas de participar o permitir acciones violentas contra las comunidades locales o de contratar empresas de seguridad privada, con la participación de policías y militares, retirados o en actividad, o de vínculos con grupos guerrilleros o paramilitares. Utilizan esas opciones para imponer la violencia como modo para proteger su infraestructura (González Posso, 2011). Este tipo de asociaciones muestra un Estado que no puede cumplir sus misiones de vigilancia y orden público y los privatiza de hecho (Toro y Macías, 2012).

En los extractivismos también se ejerce violencia en el desplazamiento de personas y comunidades por la imposición de enclaves (especialmente en la minería), y además porque generan condiciones de tan alto riesgo y vulnerabilidad que las personas abandonan sus hogares (véase, como ejemplo, Celis Sánchez y Sepúlveda Giraldo, 2012; Vargas Valencia, 2013). Se registran homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, raptos y torturas, violencia contra líderes sindicales, etcétera. La violencia en la minería, además, promueve “un patrón de violencia anticomunitaria que atenta contra el derecho y las expectativas de derecho de propiedad sobre tierras y territorios constitucionalmente cualificados” (Vargas Valencia 2013: 68).

Los casos de violencia extrema son los asesinatos de los defensores del ambiente, un drama que ocurre en todo el mundo. Entre 2002 y 2017, fueron asesinadas 1.558 personas que defendían sus tierras o medio ambiente en 50 países, según una reciente revisión (Butt y colab., 2019). América Latina es la región más peligrosa del mundo; Brasil y Colombia están entre los países que lideran la lista, y la mayor parte de los hechos está directamente vinculada a sectores extractivos, como la explotación minera o forestal. Los indígenas son los más afectados por esta violencia; llegando al 40% de las muertes en los últimos años. La mayoría de los casos se debe a conflictos por extractivismos mineros o agropecuarios. La revisión, además, indica que los factores que incrementan las posibilidades de la violencia incluyen fuertes incentivos financieros, políticos u otros, desde gobiernos o empresas para explotar recursos naturales; la marginalización económica, cultural o política de quienes dependen de los recursos naturales, y un débil Estado de

derecho, corrupción o impunidad. Si bien Bolivia no se encuentra en la nómina de países con importante número de muertes, es creciente el nivel de violencia hacia los defensores del ambiente y de derechos humanos y los patrones de abuso del poder y de violencia se van repitiendo en las naciones de la región.

Entre los países vecinos, además de Colombia, en Brasil se ha naturalizado la violencia rural. La Comisión Pastoral de la Tierra en su último informe señala que en 2018 aumentaron un 4% los conflictos en el medio rural en comparación al 2017 (totalizaron 1.489 casos) (CPT, 2019). La mayor parte de ellos se debieron a disputas sobre tierras y territorios involucrando a un estimado de un millón de personas, sobre todo en la región amazónica (CPT, 2019). Se observó una caída en la cantidad de asesinatos (28 en 2018 contra 71 en 2017), pero la mitad de las víctimas eran líderes sociales locales. La comisión entiende que esa es una “violencia pedagógica”, en la que se castiga con la muerte a los que intentan “frenar el desarrollo” (CPT 2019: 12). Por su parte, el Consejo Indigenista Misionario registró el 2018 un aumento sustancial de invasiones de tierras, explotación ilegal de recursos naturales (109) y un incremento del 22,7% en el número de asesinatos de indígenas (135) (CIMI, 2019). Se concluye que está en marcha un modo renovado de apropiación de territorios indígenas y que es todavía más violento (CIMI, 2019).

Por estas razones, la problemática de la violencia en los extractivismos no debe ser interpretada como hechos aislados o consecuencias imprevistas. Por el contrario, las violencias, en sus distintas formas, están inmersas en todos los extractivismos, comenzando en los modos de asegurar la propiedad y el control sobre los recursos naturales. En la tradición occidental la violencia física, sea en su aplicación o en la amenaza, es importante para la legitimación, la sustentación y la aplicación de los regímenes de propiedad, advierte Blomley (2003). De ese modo, el propietario del mineral, el petróleo o la tierra cultivada impondrá ciertos usos e incluso estará dispuesto a recurrir a la violencia para asegurarlo. Los marcos normativos pueden legitimar cierto tipo de violencia de esos propietarios, pero también del Estado, reclamando que este, por ejemplo, movilice a la policía para defender un asentamiento minero o petrolero. Se generan regulaciones y adjudicaciones sobre el control, poder y disposición de los recursos naturales, que le permiten al propietario conceder o negar el acceso a un recurso o su tierra.

Además de esto, los extractivismos aprovechan medios legales e ilegales para ejercer violencia con distintos fines sea para acceder a los recursos, ocultar sus impactos o incluso perseguir a grupos o líderes ciudadanos. Allí operan, por ejemplo,



desde el sobornar o presionar a autoridades policiales o judiciales para actuar contra grupos locales hasta contratar un sicario para asesinar a un defensor de la Naturaleza. En estos casos se incumplen todo tipo de derechos, llegando al extremo de negar el derecho a la vida. El ejercicio de la violencia está débilmente penado y la impunidad es alta. Eso puede ocurrir simplemente porque no hay procesos policiales y judiciales que investiguen los hechos, pero inclusive porque puede haber normas que exoneran de responsabilidad penal a policías o militares que maten o lesionen a personas (como se ha indicado en Perú). Del mismo modo, no puede disimularse los problemas que existen con la corrupción judicial en los diversos niveles del sistema de justicia (véase Basabe-Serrano, 2013).

## **El escalamiento de la violencia y el incumplimiento de los derechos**

Es posible dar un paso adicional en el análisis al considerar las relaciones entre violencias y extractivismos. Considerando una escala de creciente violencia se pueden ordenar sobre ella buena parte de los incumplimientos que involucran derechos, tal como se esquematiza en la Figura 4.4.

En el esquema se presentan los incumplimientos más repetidos ante los extractivismos, que van desde aquellos que afectan derechos de acceso a la información y la consulta ciudadana, para seguir con las distorsiones y manipulaciones en las evaluaciones ambientales o económicas y continuar hacia distintos tipos de criminalización y hostigamiento. El extremo está en los casos de represión o incluso asesinatos. En la escala de violencia, el extremo de mayor gravedad corresponde allí donde se compromete la vida de las personas, tal como sucede en las muertes que resultan de refriegas entre manifestantes y la policía o militares o en los asesinatos de líderes sociales por sicarios.

La contracara de la violencia es que siempre implica a derechos que son violados. A su vez, muchos incumplimientos de los derechos desembocan en la violencia o en el ejercicio de esta. La relación es recíproca y estrecha. Por ejemplo, negar la información y consulta a las organizaciones indígenas supone vulneraciones de sus derechos específicos, pero a la vez representa violencias colectivas, por lo menos en los planos étnico y político.

Este análisis permite señalar otra dinámica que es muy relevante y que no siempre se advierte. Los incumplimientos de los derechos generan crecientes niveles de



**Figura 4.4** | Principales incumplimientos de los derechos ordenados en niveles crecientes de violencia. Las vulneraciones de los derechos y las violencias se alimentan recíprocamente en los extractivismos.

violencia, que desencadenan violaciones crecientes. Las violaciones de los derechos que tienen el propósito de acallar las disputas ciudadanas ante los extractivismos, en realidad agravan la situación. Se generan condiciones para dar un paso más en la escala de violencia, y pasar a un incumplimiento de otros derechos con un nivel mayor de violencia, tal como se ilustra en la Figura 4.4. Los incumplimientos de los derechos y el ejercicio de las violencias se alimentan mutuamente. Es así que, cuando se ocultan datos sobre los impactos ambientales o se impide la consulta ciudadana, casi siempre recrudecen las denuncias ciudadanas, y eso genera que los promotores de los extractivismos sean hostigados mediáticamente. A su vez, cuando anular las resistencias locales no surte efecto, entonces se apela a un grado creciente de violencia, como puede ser la judicialización de organizaciones o líderes ciudadanos. Cuando se comienza a subir por la “escalera” de la violencia de incumplimiento de los derechos, los extractivismos obligan a continuar ascendiendo por esos escalones.

El caso del TIPNIS, en el oriente boliviano, en toda su complejidad, muestra cómo ha operado esta problemática, ya que los incumplimientos de unos derechos obligaron a violar otros para sostener el plan de construir una carretera, y poco a poco se avanzaba en esa escalera que desembocó en la represión física como ocurrió en Chaparina en 2011<sup>34</sup>.

Este escalonamiento puede ocurrir a lo largo de varias décadas. Existe evidencia de ello en la Amazonía de Brasil con la ocupación ilegal de tierras, el incumplimiento de derechos de los pueblos indígenas, la clarificación de la propiedad, etc., instalado por lo menos en la década de 1960. En ese tiempo, se introdujo la minería ilegal de oro para derivar en la “convivencia del Estado con los pistoleros”: inicialmente se contrataba pistoleros para impedir la ocupación de tierras que estaban ociosas, pero eran controladas por latifundistas, y desde ese momento, con el paso de los años, eran utilizados como “ayudantes” de la policía local, siempre insuficiente. Luego, fueron contratados para amenazar o asesinar a líderes locales, ambientalistas, sindicalistas, religiosos, a lo largo de la década de 1970, para terminar por consolidarse en la década de 1980 (Refkalefsky Loureiro y Aragão Pinto, 2005).

## Extrahecciones

Teniendo presente las particularidades entre la violencia y los incumplimientos de los derechos que se acaban de analizar queda en evidencia la importancia de la noción de extrahecciones como expresión de incumplimientos de los derechos y la violencia. Como se adelantó antes, esta nueva palabra se acuñó a partir del término latino *extrahere*, donde *ex* significa ‘fuera’ y *trahere* alude a ‘quitar y arrastrar hacia sí’. Por lo tanto, extrahección se refiere a los extractivismos por los cuales se arrancan los recursos naturales, sea de las comunidades como de la Naturaleza. Alude a la coincidencia de las violaciones de los derechos y de la recurrencia de la violencia (el concepto se adelantó en trabajos anteriores; Gudynas, 2015).

El término se aplica a muchos extractivismos depredadores actuales que están inmersos en incumplir derechos y en discurrir en la violencia. Su utilidad radica en poner en evidencia la íntima vinculación entre esos fenómenos, y de esa manera desmontar la idea que representan problemáticas distintas y que solo coinciden por accidente. Esa postura, por ejemplo, corresponde a quienes insisten en que las

34 Evo Morales niega su responsabilidad en la represión violenta de indígenas, M. Azui, El País, Madrid, 27 de septiembre de 2011, [https://elpais.com/internacional/2011/09/27/actualidad/1317074417\\_850215.html](https://elpais.com/internacional/2011/09/27/actualidad/1317074417_850215.html)

violaciones de los derechos o el uso de la violencia en los extractivismos son casos excepcionales, desviaciones o errores.

En cambio, los casos que se presentan en este libro a través de la comparación de información muestran que los incumplimientos de los derechos y la violencia son parte consustancial de muchos extractivismos. Esos componentes son indispensables para poder imponer proyectos extractivos en distintos sitios, y ocurren asociados entre ellos. Allí donde se están incumpliendo derechos de las personas o de la Naturaleza es que operan violencias de algún tipo. Esas asociaciones entre violencias e incumplimientos de los derechos determinan la transformación de extractivismos en extrahecciones. En ello intervienen, además, varios factores ya señalados, tales como los efectos derrame que debilitan las salvaguardas de los derechos, la impunidad o la aceptación social de la violencia. Se llega así a la situación actual, en la que las extrahecciones están más difundidas de lo que se cree.





Centro de Documentación e Información Bolivia

El Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB es una institución sin ánimo de lucro comprometida con archivar y generar información para la investigación social sobre medio ambiente, extractivismos y derechos humanos.



LaLibre es un proyecto que promueve y genera conocimiento crítico desde Bolivia a través de la edición, venta y distribución de libros, actividades de debate y formación social.



Un observatorio para promover, evaluar y revisar la situación de los derechos de la Naturaleza. Sus metas actuales incluyen: El seguimiento de la situación de los derechos de la Naturaleza, incluyendo una revisión de los marcos legales, las violaciones, y las respuestas ciudadanas y gubernamentales. Identificar las mayores violaciones de esos derechos, y en especial cuando están asociadas a violaciones de los derechos de las personas. Promover esos derechos con investigaciones, capacitación, difusión y apoyo distintos movimientos e instituciones.

Más informaciones:

[www.NatureRightsWatch.com](http://www.NatureRightsWatch.com)

# DERECHOS Y VIOLENCIAS EN LOS EXTRACTIVISMOS

## EXTRAHECCIONES EN BOLIVIA Y LATINOAMÉRICA

Este libro está enmarcado tanto en esos clásicos entendidos de la violencia como en los actuales usos del término. Se enfoca en los problemas vigentes de los extractivismos, tales como las explotaciones mineras o petroleras, con todos sus severos impactos sociales y ambientales. Toda vez que eso ocurre se están violando los derechos de las personas y del ambiente. De este modo, se vinculan cuestiones de enorme urgencia en Bolivia y en toda América Latina: los extractivismos, los derechos y la violencia.

Este estudio muestra que los avances de los extractivismos discurren por una paulatina y sostenida erosión y limitación en la salvaguarda de los derechos. En muchos de esos casos ello sucede bajo dinámicas de violencia, que puede ser la imposición de un emprendimiento como la persecución a líderes ciudadanos. Así las contradicciones entre extractivismos y derechos expresan, al mismo tiempo, problemas más profundos en la justicia y la democracia. Otra vez los significados de las palabras son elocuentes: violar en su sentido original implicaba quebrantar o traspasar una ley, precepto o estatuto.



ISBN: 978-99974-321-7-9



9 789997 432179



Centro de Documentación e Información Bolivia



ODDNN  
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS  
DE LA NATURALEZA



CLAES

Centro Latino Americano  
de Ecología Social